

“Los medios criminalizan a los asentamientos populares”: sociólogo denuncia cobertura sesgada en desalojos de campamentos

El Ciudadano · 3 de octubre de 2025

"Quiero decir fuerte y claro que en estos campamentos hay dignidad, hay lucha y hay organización y no al revés como está instalado, por lo general, en los medios de comunicación", planteó el académico de la Universidad de Playa Ancha, Nelson Carroza Athens, en conversación con La Mañanera.



El doctor en geografía y sociólogo Nelson Carroza Athens, denunció este viernes la estigmatización y el tratamiento sesgado de los medios de comunicación ante los desalojos de campamentos en Chile.

En conversación con el programa La Mañanera, conducido por el Director de El Ciudadano, Javier Pineda Olcay, el académico de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), e investigador responsable del proyecto Fondecyt «Más allá de la [vivienda](#): un enfoque interdisciplinario para comprender las repercusiones sociales de la crisis habitacional en Chile», planteó que a través de informes, realizados por organizaciones como el Centro de Estudios de TECHO, se han podido acreditar la vulneraciones de derechos que se registran «antes, durante y después», de los procesos de desalojo, que a su vez son retratados de «manera muy terrible en los medios de comunicación».

«Nosotros vemos que hay un tratamiento muy mezquino. Hay procesos de estigmatización, de criminalización de los asentamientos populares», afirmó.

El coordinador del Observatorio Participación Social y Territorio de la UPLA, planteó que desde esa instancia, «lo que nos proponemos es tener un proceso permanente de apertura de la universidad, donde desarrollamos procesos de docencia, investigación con problemáticas territoriales, con problemáticas públicas y entre esas, por supuesto la vivienda es un tema muy relevante a nivel nacional y particularmente a nivel regional, entonces en ese sentido es una línea prioritaria de nuestro trabajo».

«Desde ahí, tengo la suerte de poder ser responsable de un proyecto Fondecyt, que son los proyectos que financia la Agencia Nacional de Investigación, que nos permite durante tres años poder entender las consecuencias sociales, impactos de la crisis habitacional en Chile, y desde ese marco hemos propuesto profundizar en distintas dimensiones y una de esas ciertamente es la problemática que la vemos constantemente en el tema de los desalojos forzosos de campamento en Chile», señaló.

Mapa de la crisis: 61 desalojos y 17.500 familias amenazadas

Durante la entrevista, el sociólogo presentó el sitio web: <https://ddhhydesalojos.cl/>, una plataforma desarrollada por la Red de Derechos Humanos y Desalojos, de la cual es integrante.

«Es un espacio interinstitucional, donde encontramos distintas personas, activistas también, buscando poder problematizar esta terrible situación de los desalojos dentro de una perspectiva de derechos humanos y desde ahí hemos puesto a disposición los recursos técnicos e investigativos del trabajo que venimos haciendo y lo que hemos desarrollado es una primera estimación en Chile respecto a este fenómeno», explicó.

Este mapa interactivo busca cuantificar y visibilizar una realidad que, según el académico, los medios suelen tratar solo de manera puntual y sensacionalista.

«Por lo general, sobre esta temática, siempre vemos en los medios de comunicación, casos específicos y puntuales y en ese sentido lo que hemos querido hacer es entender cada caso, hay que entender cada caso en su contexto, hay que situarlo, hay que entender también qué pasa ahí. Sin embargo, lo que hemos intentado hacer es poder hacer una reflexión mayor y generar conocimiento que nos permita entender la magnitud de estos desalojos en Chile», afirmó Carroza.

El investigador destacó que el mapa permite situar dos realidades: «Primero, campamentos o asentamientos que han sido desalojados en Chile, que nosotros estimamos que han sido 61 a nivel nacional desde el año 2019 al 2025, que representan casi 3.600 familias en Chile».

«Y la segunda, que tal vez es la que es muy relevante sobre todo para adelantar las situaciones de este tipo, para generar estrategias de vigilancia y de denuncia también, son las familias que viven en asentamientos precarios que están amenazadas actualmente, y en este sentido hemos estimado una cifra alrededor de 116 campamentos que están viviendo esta situación y que incluye aproximadamente 17.500 familias que están actualmente en riesgo», agregó.

Carroza enfatizó la gravedad de estos números y advirtió que «si no se toman medidas, si no se intervienen, si no se toman políticas habitacionales dignas, esto se va a acrecentar aún más que lo que encontramos, que es una situación que ciertamente tenemos que atender y discutir en lo público».

Señaló que esta cartografía, que «queda a disposición de las comunidades», es un sistema de monitoreo, «que no solamente pone esta información, para que puedan visualizarla», sino que además es un mapa interactivo y un formulario «donde las

comunidades pueden hacer sus denuncias también, que permite poder situarlas también, poder reconocerlas y visibilizar lo invisible». A

«Acá estamos viendo un drama humanitario muy grande en estos procesos», expuso, al tiempo que recalcó que TECHO acreditó en un informe que en medio de los desalojos se registran vulneraciones de derechos a las familias afectadas.

Análisis Territorial y casos emblemáticos

Al profundizar en la situación de desalojos que se registra en el país, el académico planteó que gracias a la información que han podido recopilar y que han puesto a disposición de las autoridades competentes — la cual hasta el momento no ha sido revisada— , se ha podido constatar que «estos casos no están en el aire, sino que están en un territorio específico y en comunas específicas».

«Lamentablemente sabemos en qué comunas van a acontecer estos procesos durante los próximos meses y años, Nosotros lo que buscamos poner es todo a disposición de las comunidades, pero también de los tomadores de decisión, de autoridades que permitan de cierta forma adelantarse estos procesos tan terribles», señaló.

«Esta información también nos permitió para poder levantar también escenario estratégico y tipologías de casos. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que de estas 17.000 familias que están amenazadas, dos tercios se vinculan primero a casos que son emblemáticos. Son casos grandes, que han tenido también mucha visibilización de la prensa, como los casos de Alto Hospicio, San Antonio, Curanilahue y otros casos que son emblemáticos, que tienen mayor tratamiento y que de cierta forma la prensa también los ha seguido», indicó.

Sin embargo, explicó que existen otros casos que han sido «más invisibilizados», pero que son igualmente importantes, ya que representan «un tercio de estas

17.000 familias y que están dispersos en distintas comunas, a veces de manera anónima, a veces de manera aislada».

«En ese sentido, me parece que hay que generar procesos de intervención, en estas dos velocidades, en estos dos escenarios, tanto en estos casos emblemáticos, pero también en estos casos que no se conocen mucho, como los de Cartagena, Colina, Puente Alto, San Felipe, Lampa, La Florida, Puchuncaví. Tenemos nosotros mapeados los lugares y las comunas donde van a suceder estos procesos», subrayó el coordinador del Observatorio Participación Social y Territorio de la UPLA.

En el caso puntual de Valparaíso, el doctor en geografía advirtió que esta comuna «representa la peor cara de esta crisis habitacional».

«Recordemos que estos desalojos son la punta del iceberg, procesos mucho más complejos. El desalojo es la forma final, más brutal, tal vez, de una demanda insatisfecha, que es la vivienda digna para todos y todas, y en ese sentido, lo que hemos visto durante estas semanas son dos casos emblemáticos. El primero es el caso de San Antonio, que es un caso, digamos, numeroso, muy complejo, donde estaba sentada, una mesa de negociación, donde la salida era proponer una federación de cooperativas que pudiesen comprar directamente el paño a los dueños», dijo.

Sin embargo, recordó que dicho proceso de negociación no llegó a buen puerto.

«Acá hay un rol importante del Estado, pero también me parece que es un rol muy pasivo y mezquino también de los dueños del terreno y en este marco, este campamento ahora vuelve, digamos, a punto cero, y lo que se va a producir ahí, si es que se llega a implementar el desalojo, es un grave proceso humanitario, de vulneración de derechos respecto a estos procesos», sostuvo.

«Nunca se ha hecho un desalojo tan grande en Chile, además de ser complejo en términos técnicos, costosísimo (...) ayer estuvimos hablando justamente con

algunos dirigentes de la comuna de San Antonio y, lamentablemente, el panorama no alentador», subrayó Carroza.

Responsabilidad del Estado

Frente a las posibles soluciones, el sociólogo fue claro en señalar la responsabilidad del Estado.

«Yo creo que el Estado, y él mismo en particular, tiene que tener un rol más activo en estos procesos de negociación. No puede ser solamente el mediador entre privados, digamos, y los pobladores organizados, sino que tiene que comprometerse, digamos, más allá de ese rol», dijo al tiempo que recordó que históricamente ha habido ejemplos de este rol activo, como en las tomas de Peñalolén en los años 90.

«Lamentablemente, el Estado, digo yo, no ha estado flexible para poder tener un rol mucho más activo», criticó.

Desmitificando a los habitantes de los campamentos

Durante la conversación con La Mañanera, Nelson Carroza refutó el discurso que homogeniza y criminaliza a quienes viven en campamentos.

Al ser consultado sobre la composición social de estos asentamientos, el sociólogo planteó que existen ciertas estigmatizaciones, como que «en todos los campamentos hay delincuencia».

En contraposición a este relato, presentó una realidad diferente: «Por lo general, lo que nosotros hemos visto es gente organizada, muy muy organizada, que eso también le molesta a ciertos medios de comunicación, hay que decirlo. De hecho, el catastro de TECHO nos dice que casi el 80% de los campamentos tienen dirigencias activas y es un dato muy revelador del tejido social que está ahí. Hay que usarlo como una oportunidad y no como un problema, ciertamente».

Reconoció que «no se puede negar que pueden haber campamentos que tengan procesos de penetración del narco», pero insistió en que esto no es la norma.

«La gran mayoría de los campamentos no es eso, es al contrario. Es un espacio donde hay familias que desarrollan su cotidiano con mucha dignidad, que luchan día a día por una vivienda digna», expresó.

«Entonces quiero decir fuerte y claro que en estos campamentos hay dignidad, hay lucha y hay organización en su gran mayoría y no al revés como está instalado en el sentido común, por lo general en los medios de comunicación», enfatizó el sociólogo.

En la emisión de este viernes 3 de octubre de 2025 de La Mañanera, nuestro director también entrevistó a Cristóbal Rodríguez, vocero nacional de Modatima.

A continuación, puedes ver el programa completo:

Fuente: El Ciudadano